

LAS CIUDADES LATINOAMERICANAS Y LOS DESAFÍOS POST COVID-19

CONVERSACIONES

22 de julio de 2021

PARTICIPANTES:

Ana Sugranyes: Arquitecta y doctora de TU-Delft, Países Bajos. Especializada en temas habitacionales y urbanos con experiencia en investigación y asesorías a organizaciones sociales, programas y políticas habitacionales en América Latina, con estadías en Guatemala (1976-1991) y Chile (desde 1991). Fue Secretaria General de la Coalición Internacional del Hábitat (2003-2013). Es defensora de los derechos al hábitat, Presidenta de Housing and Land Rights Network (HIC-HLRN), Vicepresidenta de Ciudad Común, Secretaria del Comité Hábitat del Colegio de Arquitectes de Chile.

Victor Delgadillo: Doctor en Urbanismo (Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM). Profesor del Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesor del Posgrado en Urbanismo de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Sus líneas de investigación se relacionan con los centros históricos latinoamericanos, políticas públicas y actores sociales, ciudad y patrimonio urbano, disputas por la herencia edificada, gentrificación, teoría urbana latinoamericana y derecho a la ciudad.

Miguel Barreto: Arquitecto. Magister y Doctor en Antropología Social. Investigador principal CONICET. Decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Nordeste, Director del Doctorado de la Universidad Nacional del Nordeste en Arquitectura y Urbanismo y Director de la publicación Cuaderno Urbano. Espacio, Cultura y Sociedad. Su línea de investigación aborda la política habitacional y urbana-territorial, hábitat y derechos humanos, política habitacional, pobreza y mercantilización de la vivienda social en Argentina.

Fernando Carrión: Arquitecto por la Universidad Central del Ecuador, Maestro en Desarrollo Urbano Regional por El Colegio de México. Fue coordinador del Área de Estudios de la Ciudad de FLACSO-Ecuador. Ha dirigido el Centro de Investigaciones CIUDAD, la sede de FLACSO en Ecuador, el área de Planificación del Municipio de Quito, coordinó la RED CIUDADES para América Latina y se desempeñó como concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Sus áreas de especialización tienen que ver con la planificación urbana, la descentralización, el desarrollo urbano, los centros históricos, la vivienda, la seguridad ciudadana.

1

COORDINADORAS

María Mercedes Di Virgilio: Doctora en Ciencias Sociales (UBA). Es profesora titular regular de Metodología de la Investigación Social en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Investigadora principal del Conicet con sede en el Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA). En 2020 fue galardonada con la beca de profesora visitante en la Universidad Federal de Bahía (UFBA). En 2019 ganó la plaza de profesora invitada del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del MIGRINTER de la Universidad de Poitiers, Francia. Entre 2018 y 2019 se desempeñó como subsecretaria de Vinculación (UBA). Entre 2014 y 2018, ocupó el cargo de secretaria de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Sus temas de investigación giran en torno al análisis de políticas y procesos de gestión de políticas urbanas y habitacionales, transformaciones urbanas, hábitat popular y movilidades espaciales.

María Carla Rodríguez: Doctora en Ciencias Sociales de la UBA. Investigadora CONICET e Instituto de Investigaciones Gino Germani y profesora titular de Teoría Urbana en la Carrera de Sociología de la FSOC - UBA. Integra el comité científico de RELATEUR – red latinoamericana de Investigadores sobre teoría urbana- y la Red Iberoamericana en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos. Se especializa en temas vinculados a las políticas habitacionales, transformaciones urbanas, coproducción multiactoral de objetos de conocimiento e intervención, producción autogestionaria del hábitat.

2

DIRECTOR

Martín Unzué: Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Economía (UBA) y Licenciado en Ciencia Política (UBA). Actualmente es Profesor en dicha universidad. Dicta cursos de grado y posgrado en diversas universidades nacionales. Dirige proyectos de investigación sobre temas vinculados a la universidad, y las políticas científicas. Su último libro editado en la colección IIGG-CLACSO se titula *Profesores, científicos e intelectuales. La Universidad de Buenos Aires de 1955 a su Bicentenario*.

Mercedes Di Virgilio- Bienvenidos a esta conversación y muchas gracias a todos por participar. La propuesta de la mesa es trabajar sobre cuatro ejes. El primero, vinculado a las políticas públicas que se pusieron en marcha en las distintas ciudades para dar respuesta a la pandemia por COVID-19, en particular, en relación con las problemáticas urbanas (vivienda, alquiler, desalojos, personas en situación de calle, servicios y espacio público, etc.). Un segundo eje vinculado al patrimonio material, simbólico, cultural que nos permita pensar sobre ¿cómo impacta la pandemia en lo urbano, en la ciudad como dispositivo, como forma de vida? ¿La pandemia marca el fin de lo urbano? ¿Va a seguir existiendo la ciudad tal y como la conocemos? Un tercer eje, centrado en la participación ciudadana y los

procesos sociales transformadores. En este marco, la propuesta es pensar sobre ¿qué desafíos plantea la pandemia a las organizaciones sociales y a sus diálogos con el Estado? Aquí proponemos recoger el proceso constituyente de Chile y cuáles han sido los planteos que han surgido en ese marco en relación con el derecho a la ciudad y a la vivienda ¿Qué desafíos le impuso la pandemia por COVID-19 a la Asamblea Constituyente? Finalmente, un último eje vinculado al hábitat popular, para problematizar específicamente esa cuestión que es tan crítica en toda América Latina.

Entonces, proponemos que Fernando Carrión abra este diálogo con una intervención sobre los desafíos de la pandemia en relación con las políticas públicas. ¿Qué desafíos le planteó el COVID-19 a las políticas públicas urbanas?

Fernando Carrión- Muchísimas gracias Mercedes por la invitación. Un saludo cordial a todos los amigos y amigas. Vengo a compartir esta mesa de debate por la importancia de los temas y las personas que han sido invitadas.

Voy a reseñar aquí algunos de los debates centrales respecto de las políticas públicas alrededor del coronavirus. Debates que ya se venían planteando desde tiempo atrás y que con el COVID-19, simplemente se han acelerado. Esto en dos áreas: una, que se refiere a la estructura del Estado y otra, vinculada a las políticas públicas.

En relación con la primera, que tiene que ver con la estructura de Estado, desde la década de 1980 se ha planteado el debate entre una estructura estatal centralizada o descentralizada. El tema de salud aceleró y puso en evidencia que, desde las localidades e instancias urbanas se conoce mucho más la realidad de las poblaciones ya que la atención primaria de salud es una cuestión local, cosa que siempre se ha discutido. Así, las competencias de agua potable, recolección de basura, alcantarillado son competencias de orden municipal. La defensa de lo estatal nacional proviene de organismos multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es un organismo donde se agrupan los Estados, las naciones. De ahí que todas las directrices sean de Estado a Estado. Esto ha sido altamente discutido y cuestionado.

Una segunda entrada también referida a la estructura del Estado, que al igual que la anterior, venía discutiéndose desde tiempo atrás gira en torno a si la salud debería ser pública o privada. La pandemia mostró de una manera nítida que los hospitales o las clínicas privadas realizan un tipo de atención sanitaria que no tiene que ver con las grandes patologías o pandemias. Tienen una gran limitación desde esa perspectiva. Sin embargo, siempre se plantea que lo privado es mucho más eficiente que lo público. En esta ocasión, se ha mostrado todo lo contrario. Me pareció muy interesante el planteo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, respecto de que tendría que generalizarse la fórmula de producción de las vacunas, porque si bien son hechas de forma privada a través de la industria farmacéutica, lo hacen con recursos públicos. Creo que esto es interesante; sin embargo, eso ha quedado ahí, en *stand by*.

En relación con los debates sobre las políticas públicas, estos han girado alrededor de su condición de homogeneidad. La Organización Mundial de la Salud planteó las mismas políticas para todo el mundo; así, por ejemplo, el distanciamiento físico, la reclusión en casa, el lavado de las manos, se generalizaron por el mundo. Se formularon políticas únicas y homogéneas en realidades heterogéneas. Más aún en el caso de América Latina, que es una de las regiones más desiguales del mundo. Por eso, plantear políticas homogéneas en realidades heterogéneas genera muchos problemas, entre los que está el incremento de las brechas y las desigualdades.

Una segunda discusión que se planteó se ubicó en torno a la atención que debería ponerse sectorialmente en la salud o en la economía. Brasil y México se fueron por la línea de la economía por sobre la de la salud, pero en un sentido absolutamente distinto: Brasil se fue alrededor de la economía formal de punta y México por el peso de la economía informal, esto es, de la economía social y solidaria. Sin embargo, tanto en un caso como en el otro, los resultados sanitarios no fueron los mejores. Otros países que priorizaron la salud les fue mejor, incluso en la economía. Allí sobresalen Uruguay y Costa Rica, entre otros.

Una tercera discusión se estableció alrededor de la política internacional, bajo dos perspectivas: la del cierre de los espacios nacionales, que en Europa puso en cuestión a la misma Unión Europea, y la de las vacunas, que condujo a que las únicas válidas sean las producidas en Estados Unidos y Europa, mientras las de origen ruso o chino no son del todo reconocidas, a pesar de sus buenos resultados. Lo mismo ocurre con el sistema COVAX, de la OMS, creado supuestamente para donar globalmente vacunas contra el COVID 19 y que en la práctica ha tenido un criterio discriminatorio en términos políticos.

En cuarto lugar, vale una mención sobre las políticas urbanas propiamente dichas. La primera política que se estableció fue la del “quédate en casa”, que vació el espacio público, planteando la necesidad de reconceptualizarlo. Lo inicial en esta línea fue el cuestionamiento al uso del espacio público, que tienen diferentes connotaciones para los sectores populares y otra muy distinta para las élites. En el caso de los sectores de altos ingresos se presenta su uso público desde la perspectiva del mercado o de la soberanía del consumidor. En cambio, en los barrios populares el espacio público prácticamente no existe y cuando está presente, se observa un continuo o una prolongación del espacio público hacia el espacio doméstico: el espacio público como extensión de la vivienda. Un par de ejemplos de esta afirmación: el 11% de la población de bajos ingresos en Lima tiene refrigeradora, lo cual quiere decir que casi el 90% no la tiene. Eso hace que la tienda de la esquina —hoy revalorizada en toda América Latina— se comporte como la alacena de la casa o como prolongación del espacio de la vivienda en el espacio público. Lo mismo ocurre con las veredas o los andenes, que terminan siendo una extensión o una prolongación del espacio privado. En otras palabras, creo que esa política nos ha mostrado que no podemos seguir comprendiendo al espacio público como un concepto genérico, porque depende de su adscripción a cada uno de los sectores. Lo mismo puede plantearse en relación a la gran crisis de la vivienda.

Asimismo, también hemos visto cambios sustantivos en la concepción de la movilidad. El automóvil viene siendo cuestionado desde hace mucho tiempo. Como alternativa apareció con fuerza la movilidad sustentable o sostenible, alrededor de la bicicleta, de lo peatonal y de los *scooters*. Sin embargo, aquí, la impresión que tengo —con alguna estadística que he visto— es que la mayor venta ocurrida de medios de transporte son las bicicletas, las motocicletas y los automóviles. ¿Y por qué? Porque, en el contexto de la pandemia, la transportación colectiva genera alto contagio y porque ha sido estigmatizada. El incremento del automóvil privado se explica por la baja tasa de pasajeros que tiene la transportación colectiva. En este contexto, creo que vamos a tener, en un plazo relativamente corto, la combinación de las formas de movilidad, pero con una caída del sistema colectivo —es decir, del sistema masivo de transporte—. Existen, luego, visiones que surgen desde el ámbito territorial, como la ciudad del cuarto de hora en París, que ya se venía trabajando bajo la tesis del crono-urbanismo. También, está Barcelona con sus supermanzanas, que es una nueva forma de movilidad que cuestiona al automóvil privado. Y también Quito, con las tesis de la ciudad del vecindario o del peso del barrio. En general son planteamientos que desde hace mucho tiempo estaban presentes y que hoy terminan por consolidarse. Y por último, el alto desarrollo y uso de la tecnología; pero, en este caso, sin tener una política explícita desde las estructuras institucionales del Estado. De hecho, las aplicaciones o plataformas son globales, privadas y remotas. Simplemente la tecnología entró de una manera impresionante, tanto que el salto tecnológico ocurrido en estos dos años es similar al que habitualmente ocurre por décadas o generaciones. Da la impresión de que todo se trasladó al mundo virtual. Entre otras cosas, la misma urbe empezó a concebirse como tele ciudad.

Mercedes Di Virgilio- Si les parece, podemos seguir pensando estas dos cuestiones que planteó Fernando: la cuestión del Estado y cómo dialogan el nivel nacional las políticas de nivel nacional con el nivel local y los territorios —qué se ha visto de esto en México, en Chile y también en Argentina—. ¿Cómo han visto ustedes esta cuestión de la relación del Estado nacional con los gobiernos locales y con los territorios?

Miguel Barreto- Creo que la reacción en la Argentina, al principio, fue absolutamente centralizada, fueron medidas que se tomaron desde el Estado Nacional y en general fueron, como bien señalaba Fernando, de manera homogénea. Los famosos Decretos de Necesidad y Urgencia que fueron saliendo sucesivamente indicaban medidas generales para toda la población, tanto para lo que acá se llamó el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio), como posteriormente el DISPO (Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio). Y esto, con el devenir de los acontecimientos, a los cuatro o cinco meses, empezó a entrar en tensión con las diferencias que había en cada región, en cada provincia, en cada ciudad. De cierta manera, lxs gobernadorxs de provincias —algunxs pertenecientes a las mismas regiones— empezaron a tratar de generar sus propias medidas y dictarlas de manera más local. Esa disputa fue la que atravesó toda la segunda

parte del año 2020 y, como siempre todo sucede en Buenos Aires, esa gran disputa se veía en los medios nacionales a través de la tensión que había entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el de la Ciudad de Buenos Aires que, día a día, se disputaban la renovación de medidas a anunciar (cada quince o veinte días) donde cada uno quería salir a decir primero lo que iba a hacer, etc.

Sin embargo, quienes somos del interior del país, vemos que esta situación se reprodujo prácticamente en todo el territorio nacional. Sucedió en cada una de las provincias: lxs gobernadorxs querían dictar medidas que se adecúen a lo que les demandaban los sectores económicos y los sectores sociales de cada provincia. Esta fue la tensión que se vivió durante todo el año 2020 y que, en parte, se replicó en este 2021, aunque ya parece haber llegado a una especie de acuerdo, donde el gobierno nacional fue descentralizando y dejando algunas responsabilidades referidas a las medidas en manos de los gobiernos provinciales y de los gobiernos locales. También, al ver la diversidad de comportamientos que tiene la pandemia en cada uno de los territorios, hay que ir adecuando las medidas de acuerdo con algo que se ha ido comprobando con el tiempo: que la pandemia se expande o se contrae por picos y por momentos. Los tiempos de la pandemia no siempre son iguales en todas las provincias, ni en todas las regiones y, por ende, es necesario ir regulando las medidas.

Mercedes Di Virgilio- En muchos momentos esa tensión se expresó en que los gobiernos locales y, en particular, las organizaciones, tuvieron que asumir muchas responsabilidades y dar respuesta a muchas situaciones que ni el gobierno nacional ni los gobiernos provinciales estaban pudiendo atender. Esto reforzó todavía más el protagonismo de los gobiernos locales. Este es un protagonismo que se produce algo al margen de la normativa, porque los gobiernos locales no tendrían competencias en todas las provincias argentinas para asumir esas responsabilidades, pero las terminan asumiendo, siguen cobrando muchísimo protagonismo en la gestión de la política pública.

Víctor Delgadillo- En México, el gobierno nacional ha conducido la acción del Estado frente a la pandemia desde el momento de decretar un confinamiento que sólo fue obligatorio para el área de la educación: preescolar, primaria, secundaria, preparatoria e instituciones de educación superior. Las universidades autónomas se adelantaron al gobierno federal cerrando sus instalaciones e instaurando la educación a distancia. Así, el confinamiento nunca fue obligatorio para el resto de la población. Mucha gente que se gana la vida en empleos informales, salía a las calles y nunca fue sancionada. Durante la pandemia ha habido discrepancias entre el gobierno nacional y algunos gobiernos locales, especialmente con aquellos que son de partidos opositores al del Presidente. A pesar de ello, es el gobierno nacional el que tiene las riendas, el que toma las decisiones macro. También alcanzo a ver que, más que por la fuerza de los gobiernos locales, son los actores económicos nacionales y globales los que van marcando la pauta de la apertura económica en momentos en los que no había condiciones para realizar actividades colectivas. La industria automotriz, por ejemplo, reanudó sus actividades, aunque

no era una actividad fundamental, pero lo hizo por la presión de las compañías estadounidenses. Ahora el gobierno nacional lleva adelante la campaña de vacunación que está totalmente centralizada con criterios heterogéneos. Hoy, por ejemplo, es prioridad la frontera norte, hay una urgencia de abrir esa frontera por los vínculos económicos con las ciudades de Estados Unidos. Esto no es fruto de una correlación de fuerzas políticas, de reclamos de los gobiernos de la frontera norte, sino que es más bien producto de la presión económica. Ahora, en los últimos meses de la pandemia, hay un manejo diversificado en distintos Estados, pero lo que alcanzo a ver es que todavía el gobierno central conduce la atención de la pandemia.

Ana Sugranyes- Pienso los desafíos de la ciudad del futuro. Ya sea que salgamos del COVID-19 o que sigamos cayendo en otras variantes del virus u otros virus nuevos. Las lógicas de desarrollo indican que vamos a lo mismo, a la multiplicación de situaciones como la conocida en los últimos veinte meses. La deuda que tenemos como mundo entero, ante la falta de respeto a la biodiversidad y sus necesidades de reproducción, la vamos a pagar. Otro desafío que vislumbro en cuanto a las transformaciones de la ciudad, además de los que mencionaba Fernando de la movilidad, tiene que ver con la caída del uso de la oficina. Nosotros, que vivimos en una zona céntrica de Santiago, rodeada de edificios de oficina, imaginamos que la pandemia va a dar lugar a un cambio de usos y un cambio en la readecuación de espacios construidos que, aparentemente, pueden quedar en desuso. Y esto es una oportunidad, porque si tenemos que hacer macromanizaciones o repensar la ciudad desde el reloj, pues ojalá que logremos reutilizar estas infraestructuras desde una perspectiva de utilidad pública y de espacios de vida y no de especulación.

7

Mercedes Di Virgilio- No me quiero adelantar, Ana, pero yo soy un poco escéptica en relación a los usos sociales que se puedan desencadenar con estas transformaciones. Pensando sobre todo en el caso de Buenos Aires, el gobierno de la ciudad está muy activo en pensar la ciudad de los quince minutos en el área del microcentro y yo tengo como hipótesis que eso va a consolidar los procesos de gentrificación que se estaban dando ya en el área central de la ciudad. Ese es el temor que tengo, que no necesariamente esos nuevos usos sean usos sociales.

Miguel Barreto- Si me permitís un comentario corto, yo también coincido un poco más con Mercedes que con Ana. Porque, al principio, éramos todos más optimistas en que íbamos a cambiar todo porque la pandemia nos cambiaba el mundo y a nosotros, pero hoy todo se deposita en la vacuna. Fernando lo ha dicho y creo que la política y todo lo demás apuntan al hecho de que la vacuna parece ser la gran solución del problema y el mundo va a seguir siendo bastante parecido a lo que era. 'Vacuna, vacuna y vacuna' parece ser la política.

Ana Sugranyes- Bueno, quizás es el momento que estamos viviendo aquí en Chile, viendo lo global adverso desde la Plaza de la Dignidad, la calle, las protestas, el proceso constituyente, el inicio de las sesiones de la Convención Constitucional, que nos da impulso y una mirada de la utopía necesaria. Ojalá, logremos contagiar y orientar esta idea de una ciudad en transformación desde una perspectiva social. Y ojalá funcione, porque todo es bien complejo. Las adversidades y las dudas pesan.

Fernando Carrión- Quisiera reafirmar algo que no debe perderse en la discusión. Esto es el peso que tiene la cooperación multilateral. Yo creo que esa cooperación está conduciendo a que los procesos que deberían descentralizarse o localizarse, no ocurran. En el caso de la salud es absolutamente claro. La política salió de la OMS, las vacunas están saliendo de OMS y eso hace que todo se procese centralmente desde los Estados nacionales. Aquí en Ecuador ha habido municipios —y me imagino que en otros lugares también— que han querido comprar vacunas directamente a las empresas farmacéuticas y no lo han podido hacer. Es imposible y no lo van a poder hacer por el peso de una cooperación multilateral asentada en los Estados.

En el caso de Naciones Unidas, su entidad que vela por las ciudades —ONU-HABITAT— celebró la tercera cumbre de ciudades en Quito en 2016 sin que estén los municipios. Tal es así que tuvieron que reunirse dos días antes en Bogotá mediante la organización Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Ese es un tema complejo y difícil porque, en general, la cooperación internacional plantea la descentralización, pero sus órganos no se descentralizan y lo que es peor, por ejemplo, no otorgan crédito directo a los gobiernos locales.

Una segunda cosa que me parece importante en este debate entre centralización y descentralización es la presencia de conflictos. Nosotros hemos vivido conflictos de los presidentes de la república con gobernadores, es decir, con las autoridades de los gobiernos intermedios, como también, en escalera, con alcaldes y alcaldesas en todos los países. ¿Por qué? Porque ha habido una disputa de poderes, que revela la presencia del tema político y no la búsqueda de equilibrios, que es lo saludable en democracia. Una de las cosas que me ha llamado la atención, de lo que he estado viendo en algunas encuestas, es que, en general, la evaluación que la ciudadanía hace de sus autoridades es infinitamente superior entre los alcaldes y alcaldesas que la de los presidentes. La proximidad les permite otra visión y otra legitimidad.

Las primeras políticas de confinamiento o de cuarentena fueron de los países. Eso produjo un remesón incluso en la Unión Europea. Pero, después que los países y las regiones se cerraron, empezó a romperse esta política general de la OMS, sobre todo cuando empezó a focalizarse por barrios. Buenos Aires, Bogotá, San Pablo, entre otros, empezaron a trabajar cosas de ese tipo, por la especificidad de cada zona y porque la cuarentena podría hacerse en una escala superior a la de la vivienda (el barrio). Eso es lo que hay que hacer: focalizar y ampliar el ámbito del confinamiento, para que haya solidaridad y se formalice lo que en realidad ocurre: vínculo entre el espacio doméstico y el espacio público. O sea, ni políticas homogéneas ni el quédate en casa, es mejor trabajar por barrios en los dos

sentidos. Por ejemplo, hicimos una investigación del contagio que se producía en el centro histórico de Quito, la ciudad con la más alta tasa de contagio en Ecuador. El centro histórico tiene baja población permanente, en este momento viven allí alrededor de treinta mil habitantes. Pero llegan al día trescientas cincuenta mil personas más. Y esta población flotante proviene de barrios populares que tienen al centro como un lugar de abastecimiento o de ocio. Si queremos tener una buena política, hay que focalizar la salud en el centro histórico para que, primero, la gente que vive ahí tuguizada no se contagie y, segundo, para que la que llega tampoco se contagie. Eso es lo que hay que hacer.

Último comentario: el Estado ha fracasado en el diseño de estas políticas, lo que está conduciendo a replantear la responsabilidad de la sociedad civil, bajo un estigma muy fuerte, porque ahora se habla de incivildades, prácticamente en todos nuestros países, con lo cual se estigmatizan a los estratos populares que desenvuelven su vida en el espacio público. ¿Y cuáles son las incivildades? Que salen al espacio público a trabajar o que se concentran en sus casas. Entonces como los gobiernos no pueden controlarlas, le echaron la pelota a la sociedad civil, bajo un estigma muy fuerte como es la incivildad. Es decir: no son civilizados, no somos civilizados. Cuando uno mira la estadística de las personas sometidas a prisión por estas causas —por trasgredir las normas del confinamiento—, claramente se trata de personas provenientes de estratos populares, porque ahí trabajan, ahí tienen ocio, ahí se recrean, ahí tienen el vínculo con la tienda, que es lo que planteaba al principio.

9

Víctor Delgadillo- Una cosa que me gustaría señalar, por lo menos desde lo que conozco en México, es que la política de vacunas es pública, la vacuna es pública en un país como México donde se ha privatizado profundamente la atención del sistema de salud. Yo no sé qué pasaría en este país si estuviera en manos del expresidente Peña Nieto y de esos sectores que ya habrían buscado la manera de privatizar la aplicación de vacunas, es decir, de continuar lucrando con las necesidades de la gente. Uno de los grandes debates en México ahora es la política nacional contra los que tenían el monopolio en la industria farmacéutica, los que surtían al Estado de medicamentos oncológicos, de primera necesidad, etcétera. Además, recientemente hay sectores privados que han querido comprar vacunas para poder aplicarlas de manera privada en hospitales privados y la política, al parecer con la OMS al frente, es que no, porque no hay suficientes vacunas. De ahí que los privados no pueden acceder a comprar vacunas para aplicarlas a la gente que esté dispuesta a pagar en hospitales privados. Y otra cosa que destacaría es la alianza, la asociación entre países. No nos tiene que pasar desapercibido que México y Argentina hicieron un gran acuerdo para el procesamiento de vacunas anti COVID-19: una parte que se procesa en la Argentina y otra parte que se envasa en México. Y esta es una apuesta latinoamericana para no depender del todo de las vacunas de Europa, Estados Unidos, de Rusia y de China.

Mercedes Di Virgilio- Me gustaría señalar que no es un desarrollo nativo. Argentina está desarrollando sus vacunas, incluso está desarrollando algunas

vacunas polivalentes, con financiamiento público, y eso es bien interesante; pero se necesita más tiempo para que esos desarrollos vean la luz. Según tengo entendido, están ahora entrando en una fase de experimentación en humanos.

Víctor Delgadillo- Es novedoso, porque nuestros países dismantelaron la investigación, para comprar directamente. La lógica era ¿para qué vamos a investigar, si la investigación de punta se hace en Estados Unidos y en Europa? ¿Por qué no comprar directamente el producto hecho? Tal vez, la pandemia ha dado motivo para emprender el desarrollo propio de nuestras vacunas.

Mercedes Di Virgilio- Creo que el caso de Argentina es un poquito distinto, quizás, del resto de América Latina. Particularmente ahora, el Ministerio de Ciencia y Técnica está muy activo financiando estos nuevos desarrollos y que se ha involucrado en áreas de financiamiento que nunca había financiado, en desarrollos con un costado mucho más tecnológico.

Miguel Barreto- Sí, y en alianza con el sector privado, que creo que eso hay que destacarlo.

Ana Sugranyes- El caso de Chile es sintomático, porque después de cuarenta años de privatización de todo, también de la salud, la vacunación ha sido posible gracias a la infraestructura de la atención primaria municipal. Fue un montaje: el gobierno estaba comprando unos centenares de miles de dosis Pfizer e iba al aeropuerto con la televisión a recibir las cajitas. Hasta que la Universidad Católica, por un contrato de investigación con los chinos, logró que el Estado importara diez millones de vacunas chinas, cuya llegada no se difundió por la televisión. Interesantes contradicciones y tendencias tan dispersas, que demuestran, sin embargo, la fortaleza de esta infraestructura municipal, pública, que cuarenta años de doctrina de shock no han logrado destruir.

Fernando Carrión- Aquí hay que señalar que así como están segmentados los mercados de productos o de cualquier servicio, en el caso de la salud ocurre exactamente igual. Y no tiene por qué ser distinto. Los hospitales y las clínicas privadas se dedican a cierto tipo de enfermedades que les son rentables. No tienen capacidad de asumir una responsabilidad mayor frente al COVID o enfermedades similares, lo que ha obligado al sector público a asumir estas patologías.

Una segunda cuestión que quiero señalar es sobre las vacunas. El otro gran problema que existe es el reconocimiento o legitimidad de las vacunas. Por ejemplo, con una vacuna china hasta hace poco tiempo no se podía entrar a Europa o EEUU. Con estas regulaciones también se termina segmentando, por ejemplo, los mercados del turismo. Las vacunas que están aceptadas para entrar a EEUU y Europa son básicamente norteamericanas o europeas. Pero con las vacunas rusas o

chinas no se puede, con lo cual también se segmentan otros mercados. Hay una política internacional de las vacunas que es absolutamente discriminatoria.

María Carla Rodríguez- Creo que todas las intervenciones están poniendo de manifiesto de qué modo la pandemia ha exacerbado al máximo las tensiones. La discusión de la necesidad, aún desde la lógica de la ganancia o del capital, entra en tensión con lo público, en un contexto en el que resulta indispensable utilizar esas infraestructuras y esas capacidades del Estado, así como de apoyarse en el territorio. Como planteaba Fernando Carrión, las mejores lecturas las tienen los alcaldes y alcaldesas que tienen contacto directo y fluido con la ciudadanía, porque es necesario pensar las políticas en función de las características de las personas, de las poblaciones. Asimismo, la pandemia ha sido la oportunidad de impulsar el proceso de acumulación que tienen una dimensión económica pero también una dimensión política, Fernando lo expresó magistralmente con lo que está ocurriendo con las distinciones que se introducen con base en las vacunas. Lo que ocurre es que se están revolucionando y transformando las relaciones sociales y, particularmente, las relaciones sociales en la ciudad. El debate que recién se mencionó respecto de las áreas urbanas “vaciadas”, las áreas centrales de nuestras principales ciudades, sin duda eso es algo que venía ocurriendo desde antes y que plantea un gran desafío en términos de la apropiación social de esas esas infraestructuras. Depende si somos optimistas o pesimistas. Si se impone la lógica de la financiarización y el mercado inmobiliario, van a quedar cantidades de hectáreas de suelo urbano como museo o reserva de valor.

11

Para disparar el segundo eje que proponíamos, yo creo que en este período ha sido notorio el desarrollo de una reflexión teórico conceptual sobre la ciudad. Ya Lefebvre planteaba, en los años setenta, que era el fin de la ciudad y el advenimiento de la urbanización. Recientemente he leído un artículo que me pareció sugerente para disparar este eje en el que Víctor Delgadillo piensa las tensiones entre estas transformaciones de los vínculos sociales y del significado social y simbólico de la ciudad. Si, por un lado, asistimos a un *urbanicidio* con estos pedazos de ciudades-museo —reserva de valor— y, por otro, los sujetos, las resistencias y demandas ciudadanas generan tensiones que tienen que ver con poner en el centro la vida y reclamar por el derecho a la ciudad. ¿Es el fin de la ciudad? ¿Es una reconfiguración? Víctor, queríamos invitarte a compartir tu lectura y dar una mirada en términos de qué está cambiando y qué permanece, y cómo podría cambiar.

Víctor Delgadillo- Aunque es trillado, hay que insistir en reconocer que la pandemia COVID-19 viene a profundizar procesos que ya estaban presentes en nuestra región, en nuestras ciudades. La pandemia viene a profundizar la erosión de los atributos y materialidades de lo que nosotros entendemos como ciudad. Es una fuente que profundiza este *urbanicidio* que se comete diariamente. Sin embargo, en la pandemia, también, paradójicamente, se multiplican las reivindicaciones por la ciudad, por el derecho a la ciudad. De entrada, no resulta ocioso reconocer que los pobres siempre son los que pagan los platos rotos. Pagan

las consecuencias de los desastres derivados de fenómenos naturales, atizados por un cambio climático que ya no es tan natural. Los pobres son los más afectados por el COVID-19, una pandemia que fue importada por quienes tenemos capacidad de viajar a China y a Europa, pero se propaga más y con efectos mortales en quienes no salen de sus países. Además, por si fuera poco, la pandemia viene a multiplicar los desalojos, esta vez en la forma de desalojos inquilinarios de aquellos que pierden el empleo y no pueden continuar pagando el alquiler de su alojamiento.

Yo alcanzo a ver al menos tres grandes procesos que vienen a erosionar los atributos de la ciudad como la entendemos. La ciudad es un producto social histórico construido por generaciones y generaciones para vivir bien, la ciudad es sinónimo de diversidad social, económica, de usos del suelo, de mezcla de actividades. Cuando hablamos de ciudad a esto nos referimos: a este producto construido por nuestros antepasados, construido por nuestras generaciones actuales. Yo veo tres procesos que destruyen o erosionan la heterogeneidad de y en la ciudad, que por supuesto, en nuestras ciudades ocurren con distinta intensidad, con distinta velocidad, hasta con distinta temporalidad.

Un primer proceso tiene que ver con la deportación de población a las periferias urbanas distantes. Este modelo de política habitacional que se hizo supuestamente para combatir el déficit habitacional expulsa a trabajadores de bajos y medianos ingresos, que tienen un empleo formal y capacidad de ahorro y de adquirir un crédito hipotecario, para “beneficiarse” de un subsidio. En efecto, el Programa ABC (Ahorro, Bono y Crédito) es para trabajadores formales, no es una política para los más pobres. Esta construcción de mini viviendas todas iguales en periferias urbanas distantes significa eso, deportar a esa población, es decirle: “tú no mereces vivir en la ciudad –parafraseando a Oscar Oszlak–, tú tienes capacidad de compra en periferias distantes, pues ahí te alojas”. Y esta política, que surgió en Chile, la vimos en México a lo grande; después vimos a Lula da Silva y Dilma Roussef, con el programa *Minha Casa Minha Vida*, repetir estas operaciones inmobiliarias en Brasil, financiarizadas en muchos casos. Esta vivienda social se usó como un vehículo para reproducir capitales financieros en mercados globales. En menor escala, también la hemos visto en el Ecuador de Correa y en otras ciudades de otros países. Esas periferias urbanas homogéneas y unifuncionales no son ciudad y a su vez vacían a la ciudad de su gente, en este caso trabajadores.

Un segundo proceso tiene que ver con la renovación selectiva de áreas urbanas centrales. En nuestras ciudades se están construyendo pequeños o grandes rascacielos, megaproyectos, torres de oficinas de corporativos, de viviendas residenciales, y se multiplican los centros comerciales. Muchos de estos permanecen vacíos porque no se construyen en función de necesidades locales y los precios son inaccesibles para la mayor parte de la población. Además, a quienes los construyen pareciera darles igual si se ocupan o no se ocupan, porque no son producidos en función de su valor de uso. En plena pandemia el gobierno local “de izquierda” de la Ciudad de México ha autorizado la construcción de más rascacielos de oficinas. ¿Por qué se construyen más oficinas cuando estamos en la época del *home office* y hay una tasa muy alta de oficinas vacías que se alquilan? En la Ciudad de México sobran oficinas en renta y vienen nuevos desarrollos con oficinas de corporativos, etcétera, porque no se construye en función de necesidades locales.

Todos estos megaproyectos tienen la “ventaja” de que hacen ver a la ciudad como competitiva, la hacen ver moderna, hacen aparecer al gobierno de izquierda como eficiente, como un gobierno amigable con el capital. Además, se generan empleos temporales: se necesitan albañiles, ingenieros, etcétera, pero estos edificios después permanecen vacíos, permanecen abandonados. Además, estos nuevos edificios tienen efectos perversos en los entornos inmediatos, porque encarecen nuestras ciudades, nuestros barrios, incrementan los precios de las rentas urbanas y dichos incrementos conducen al desplazamiento de la gente. Tanto en periferias distantes como en áreas urbanas centrales asistimos a “la construcción por la construcción” de activos financieros. A esto, algunos colegas lo comenzamos a llamar urbanismo fantasma. Estamos produciendo artefactos para que no sean habitados. Colegas estadounidenses a esto le llaman urbanismo zombi: son artefactos, construcciones que están medio muertas y medio vivas. Pero, curiosamente, he encontrado investigaciones de colegas estadounidenses que dan cuenta de este tipo de artefactos abandonados en diferentes ciudades del mundo, en Angola, en México, en los Estados Unidos, en España, etc. Esta parece ser una característica de nuestro tiempo. La gran pregunta es: ¿qué hacemos con esto? ¿lo invadimos, lo ocupamos? ¿Qué uso social le podremos dar?

Un tercer proceso que también viene a erosionar el sentido de ciudad que reivindicamos, es el capitalismo de plataformas digitales, que ha tenido un profundo avance con la pandemia. Ya antes de la pandemia asistíamos a disputas entre los taxistas versus Uber. Eso, frente al mutismo de nuestros gobiernos a nombre de la libre competencia. Ya antes de la pandemia, AirBnB canibalizaba nuestros barrios: se encarecen las rentas, se transforma el barrio, cambian los usos del suelo, las pequeñas tienditas, comercios de la esquina y servicios de barrio eran sustituidos por servicios para visitantes y turistas (cafés, lavanderías, restaurantes, etcétera). A menudo, cuando se habla de la ciudad de los quince minutos, yo pienso tanto en el libro de Ian Brossat, teniente alcalde de la vivienda en el municipio de París entre 2014 y 2018, para quien la ciudad de los quince minutos es inalcanzable para el común de los parisinos. La ciudad de los quince minutos es para turistas que pueden pagar las altas rentas en París. Así, la ciudad de los quince minutos ni en París es realidad, solamente existe para un selecto tipo de población. De la misma forma que en la Ciudad de México, la “ciudad compacta” es un lujo que sólo clases medias y altas pueden pagar. Con la pandemia, este capitalismo de las plataformas digitales ha avanzado de forma brutal: la entrega a domicilio, el entretenimiento, las plataformas que nos permiten la educación a distancia, el trabajo a distancia. Hay un tremendo mutismo de nuestros gobiernos, tienen miedo a regularlo. Además, cuando se atreven a regular no impiden que el costo de esa regulación se traslade directamente a los usuarios. En México, en junio de 2020, se impuso un impuesto al valor agregado del quince por ciento a estas actividades económicas que de inmediato fue trasladado a los consumidores. Así, estas plataformas que no son dueñas de un solo alojamiento, ni de un solo taxi, lucran con bienes, servicios y ciudades que no son suyos y erosionan la economía local. También, se han profundizado otras tendencias que ya veíamos de antes. Esto que Fernando Carrión llama agorafobia, el miedo al espacio público, se

fortalece porque es en las calles, en las plazas, el lugar en el que nos podemos contagiar.

Finalmente, yo alcanzo a ver que la política pública (al menos en México) es más de lo mismo. Ya sé que en México la gran diferencia actual con otros países latinoamericanos es la gran aceptación del presidente entre la ciudadanía, muchísimo mayor que lxs alcaldes, alcaldesas y gobernadorxs. El fuerte de la política nacional son los subsidios directos, la entrega directa a través de tarjetas de débito. Este tipo de asistencialismo, en mi muy particular opinión, todo lo que quiere mostrar es que el capitalismo funciona mejor y alcanza para eso: para tener sosegados a los más pobres y que sobrevivan. Claro, esto lo hacen con la mano izquierda: dispersan subsidios directos, el mejoramiento de vivienda, las ayudas a las madres solteras, a la población indígena. En cambio, con la mano derecha, siguen los megaproyectos. ¿Por qué en esta ciudad, para salir de la crisis, se tienen que autorizar más megaproyectos? ¿Para quién son? ¿A quién le sirven? En materia de vivienda, por ejemplo, la gran política es revender las viviendas abandonadas en periferias distantes. Y para poder revenderlas con inversión pública se intenta llevar servicios, equipamientos, para hacerlas un poco habitables. Así es que yo veo más de lo mismo.

Para cerrar esta intervención, en un mundo donde se urbaniza sin construir ciudad, llama tanto la atención que, en nuestra América Latina, en este México, se siguen multiplicando resistencias, movilizaciones, reivindicaciones que reclaman la ciudad y el derecho a la ciudad. Desde muy distintas ópticas, a veces estos movimientos son más bien defensivos, son reactivos frente a un megaproyecto, frente a un edificio de la esquina. Sin embargo, lo interesante es esto: que reivindican la ciudad y la reivindican como derecho la diversidad social, la diversidad económica y la diversidad política. Reivindican la ciudad como el derecho a permanecer habitando en ciertos territorios o áreas de la ciudad y, mucho más interesante aun, es que reivindican la ciudad como esto que Horacio Capel y Fernando Carrión, entre otros, hablan: nos recuerdan que la civitas es la comunidad de ciudadanos, que la polis es la comunidad política. Así, estos colectivos reivindican el derecho a participar en la toma de decisiones de nuestros barrios, de nuestras ciudades. Este es un gran déficit, es la gran laguna que veintitantos años de gobiernos de izquierda en la Ciudad de México no han incorporado, porque la llamada participación ciudadana que practican sigue siendo acartonada, formalista, para tomarse la foto y legitimar decisiones previamente tomadas.

María Carla Rodríguez- Muchas gracias, Víctor. Muy desafiante verdaderamente. Me gustaría que circuláramos reflexiones sobre este eje. La pandemia parece haber incrementado esta tensión entre la utilización y la masificación de políticas de subsidio directo hacia las poblaciones más desfavorecidas. El Estado, por un lado, masifica estos instrumentos —por lo menos en el caso argentino— a través de la participación de algunas organizaciones y movimientos sociales que se institucionalizan como parte del proceso de gobernabilidad sistémica. Al mismo tiempo, junto a esta mano progresista, aparece esta mano derecha de un modelo de

urbanización que no solo expande la ciudad para la ganancia, sino que profundiza los desequilibrios ambientales. ¿Cuál es el significado de la participación? Las posibilidades de participación sustantiva de las comunidades en los municipios, en los territorios, en los barrios, y por contrapartida, el auge de mecanismos de participación decorativa junto con esta ciudadanía debilitada: se atiende a través del subsidio, con una minoritaria movilización del recurso público (si lo comparamos por ejemplo, con las erogaciones de servicio de la deuda o gastos de defensa). Esto produce una degradación de la ciudadanía, como parte de este urbanicidio. Me gustaría que algunx de ustedes comparta o amplíe algunas de estas reflexiones sobre qué es lo que está ocurriendo. Va apareciendo la política como una dimensión muy desafiante en distintas aristas y en distintos niveles, como bien se planteó, desde lo transnacional a lo local.

Miguel Barreto- Creo que los procesos neoliberales de negocios sobre lo urbano son algo que viene desde hace rato, que tiene bastante desarrollo y se acentúa cada vez más. Lo que llamamos extractivismo urbano, esta búsqueda de extraer ganancias de los procesos de acumulación que se dan en torno a la producción del espacio que, como bien han señalado varixs, particularmente Víctor, ocurren en ciudades que muchas veces ni siquiera tienen necesidades de ese tipo de edificios; que aparecen como procesos globales de acumulación. Tal y como explica Saskia Sassen, son formas de mostrar activos que en realidad son grandes negocios financieros y simplemente aparecen como garantía o respaldo de esos grandes negocios. Esta tendencia viene desde hace décadas, con el avance del neoliberalismo a nivel global que, de cierta forma, ha escogido a las ciudades como uno de los puntos centrales de hacer negocios. Este es un hecho que no tiene que ver con la pandemia. La pandemia ha exacerbado estos procesos, y en muchos casos lo que nosotros notamos en las investigaciones que hicimos es que, para ello, sí se ha intentado aprovechar esta falta de democracia que generó el propio contexto pandémico: falta de control o falta de regulación para avanzar sobre excepciones o apropiaciones de tierras públicas, traspaso al sector privado, o construir por excepciones cosas que no se pueden. Este tipo de cosas se ha visto mucho. Se han exacerbado estas tensiones entre regulación y desregulación. Es algo frecuente, incluso en ciudades intermedias en Argentina, con la aparición de los desarrollos inmobiliarios en la periferia, en muchos casos ocupando suelos que ambientalmente no pueden ser ocupados. En la etapa previa a la pandemia, dentro de todo, había una ciudadanía activa que estaba controlando estos procesos y denunciando. El año pasado, en muchos casos, aprovecharon este encierro generalizado de la población para iniciar negocios urbanos que estaban demorados o que estaban imposibilitados por estos controles. Creo que, en ese sentido, la pandemia ha sido una buena oportunidad para avanzar aún más, profundizar una tendencia que ya estaba presente previamente.

Martin Unzué- Hago una pregunta, o un comentario. Me interesó mucho lo que estaba planteando Víctor recién, viendo el proceso que se está dando en la Ciudad de Buenos Aires, tan parecido a lo que él está describiendo que sucede en México: la cuestión del urbanismo fantasma, la enorme inversión financiera en barrios enteros que luego quedan vacíos. Tenemos el ejemplo de Puerto Madero en Buenos

Aires, donde se estima que, más o menos, la mitad del barrio está desocupado y, sin embargo, hay nuevos proyectos en la ciudad, en Costa Salguero, en la ex ciudad deportiva de Boca, que son faraónicos, con inversiones de miles de millones de dólares, planificados para construir viviendas que van a tener costos de diez mil dólares el metro cuadrado, algo absolutamente fuera de escala, inaccesible. Y, sin embargo, avanzan con mucho apoyo del gobierno. Además de destacar que estos proyectos se están dando en estos momentos de crisis y con una crisis muy fuerte en el mercado inmobiliario, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Lo que me llama la atención es que Víctor señala que esto se produjo, en el caso mexicano, con gobiernos de la ciudad que eran gobiernos de izquierda, y acá, en Buenos Aires, se produce con gobiernos que no son de izquierda, que son gobiernos de derecha, y que sin embargo parece que tienen la misma lógica de funcionamiento. Y quiero destacar el efecto devastador que tiene sobre la ciudad como construcción social. En los últimos años, hay una destrucción de buena parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad, reemplazado por edificios de baja calidad, que luego terminan vacíos y que se van expandiendo por toda la ciudad, sin protección o violando todas las formas de protección del patrimonio.

Fernando Carrión- Quiero agregar algunos comentarios a partir de la intervención de Víctor. Primero, lo que ocurrió en el cambio del siglo XIX al XX, en términos de la urbanización, fue el crecimiento sin par de los suburbios. Pero ese crecimiento se hizo gracias al automóvil y, por tanto, para residencias de personas con altos recursos económicos. Esto incluso llegó a tener un nombre que se generalizó: ciudad dormitorio, a pesar de que conceptualmente no puede haber una ciudad donde la gente simplemente duerme, porque la ciudad es el espacio de la heterogeneidad. Pero eso es lo que ocurrió erróneamente. Le Corbusier afirmó que el éxito de una ciudad depende de su velocidad. Si esto ocurrió en el cambio del siglo pasado, lo que estamos viviendo en el cambio de este siglo tiene que ver con lo mismo, pero con otra tecnología: se pasó del automóvil a las nuevas tecnologías de la comunicación. Y aquí aparece la relación de la ciudad y el COVID-19, que reposicionó dos conceptos importantes en términos urbanos: la densidad y la distancia.

La idea que había era la de lograr la mayor densidad posible, lo cual condujo a la trampa de la ciudad compacta, porque supuestamente era lo que convenía. Pero esta propuesta fue debatida porque un lugar con alta densidad es proclive a los contagios, además de que es el lugar de mayor atracción para el mercado inmobiliario y que es la zona en donde se ha producido la mayor gentrificación. La ciudad compacta condujo a la gentrificación, es decir, a expulsar a los pobres al introducir a los sectores de altos recursos económicos. Por todo esto, ese tema se redefine, porque se plantea la necesidad de establecer las densidades de forma equilibrada en todo el territorio.

Y, por otro lado, está el tema de la distancia, vinculado a las nuevas tecnologías. En un trabajo reciente que hicimos con Paulina Cepeda, llegamos a la conclusión de que se están viviendo tres procesos simultáneos. Uno, de relocalización de las actividades de la fábrica, la oficina o la universidad a la casa, al *home office*. Pero no

solo el trabajo sino también los servicios: la salud, la economía, el comercio, la recreación, el turismo, el fútbol pasaron del espacio físico al remoto o virtual. Todo esto produjo una metamorfosis del espacio y de las infraestructuras urbanas, conducente a un cambio paradigmático: de la ciudad material a la ciudad de plataforma.

Una segunda cosa que ocurre con mucha fuerza es la deslocalización. En otras palabras: está saliendo mucha población de las zonas centrales hacia las zonas periféricas o hacia ciudades más pequeñas. Nos dimos cuenta de que hay muchas actividades que pueden trasladarse y esto es posible por la disponibilidad de la tecnología. Esto es, claramente, un proceso de des-urbanización.

Adicionalmente, están apareciendo nuevas periferias que no son los suburbios europeos o norteamericanos de antes. Aquí en América Latina, en la misma línea de reflexión de Víctor, nosotros estamos denominando como urbicidio a estos desarrollos mal llamados de asentamientos humanos. ¿Y por qué? Porque estos espacios no llegan a ser urbanos, sino suburbanos. Esto es, menos que urbanos. En este caso, los suburbios no son para los sectores de altos ingresos sino para sectores populares, que en Latinoamérica adoptan los nombres de villa miseria, favelas, pueblos jóvenes o barrios de rancho, según el país. Estos asentamientos surgieron gracias al acelerado proceso de migración del campo a la ciudad, desde la posguerra, sin llegar a ser absorbidos por la ciudad, debido a que las políticas públicas centralistas poco o nada pudieron hacer.

Y una tercera, que es mucho más compleja: la alocalización; es decir, la pérdida de la localización del trabajo o de los servicios. ¿Y por qué esto? Porque hoy día lo que se busca es el trabajo más barato y el de mejor calidad, en cualquier lugar del mundo. Eso de tener el trabajo en una fábrica local o barrial está cambiando aceleradamente.

La presencia en el planeta de la pandemia por COVID-19, en un lapso muy corto de año y medio, ha traído cambios notables, tanto que nosotros mismos no nos damos cuenta. Cuando yo trabajaba en FLACSO, la institución me pagaba el agua potable, la energía eléctrica, el internet y la telefonía. Ahora yo pago la luz, la energía y todos los servicios en mi casa, produciendo un cambio en la relación trabajo-capital y en las relaciones laborales en general.

Y aquí viene un gran problema: todas estas plataformas son globales, todas son privadas y todas son virtuales. ¿Qué política local se puede hacer frente a ellas? Ustedes recordarán, en junio 2021, más o menos, hubo una reunión del G7 para ver la posibilidad de que los Estados puedan cobrar los impuestos a las plataformas como Amazon, Google, y Uber. Creo que esta es una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a trabajar, porque le asignamos más responsabilidades a la política pública de las que puede hacer. Seguimos pensando la política pública con los mismos instrumentos del pasado, y creo que el gran problema o la gran pregunta que tenemos ahora es ¿cómo generar políticas urbanas locales con infraestructuras globales, privadas y virtuales, sobre las que no tenemos ninguna jurisdicción de actuación?

Y, para terminar, en relación a la suburbanización. Con Paulina Cepeda también hemos trabajado la desurbanización, que va en la misma línea del urbidio que estamos pensando. De Nueva York salieron en este año ochocientos mil personas, como efecto directo del COVID-19 y la tecnología. De Londres salió el nueve por ciento de su población, debido al COVID-19, a la tecnología y al Brexit. ¿Por qué el Brexit? Porque antes no había trabajadorxs “extranjers” sino trabajadorxs comunitarixs, amparados por la Unión Europea. El momento en el que Gran Bretaña sale de la Unión Europea, todxs esxs trabajadorxs se vuelven extranjers y, por lo tanto, tienen un estatus distinto. En el caso de América Latina, el caso más interesante es el de Lima, que salieron trescientas cincuenta mil personas, principalmente por el COVID-19. ¿Y por qué esto? Porque esta gente decidió regresar a sus lugares de origen, porque ahí la interacción es más baja y tienen mayor acceso a productos vitales.

María Carla Rodríguez- Es un enorme desafío, Fernando, reimaginar cómo sería la acción política posible en semejante contexto.

Ana Sugranyes- Desde Chile, me gustaría aportar algunas observaciones sobre los efectos de las políticas públicas relacionadas a la vivienda, al hábitat y a la ciudad. En primer lugar el impacto social y urbano del subsidio habitacional. Durante cuarenta años, en dictadura y democracia formal, los gobiernos, lxs parlamentarixs, los partidos políticos, orquestados por la Cámara Chilena de la Construcción, han movilizado recursos para que funcionara el negocio inmobiliario y se estabilizara el sector de la vivienda o de la construcción en la macroeconomía. Esto ha producido suburbios de muy mala calidad habitacional, que no son parte de la ciudad viva, que sufren segregación y fragmentación, que son extensas concentraciones homogéneas de pobreza, o manchones dentro de la trama urbana. La lógica sostenida es el apoyo a la empresa, además de múltiples beneficios urbanísticos. Ahora pasa lo mismo, pero en áreas centrales de las ciudades, con edificios en altura de cuarenta pisos y nano viviendas de diecisiete a veinticinco metros cuadrados, llegando a densidades de veinte mil habitantes por hectárea. Se trata de edificios que pertenecen a un solo dueño con miles de viviendas en arriendo. Al final, en la periferia y en el centro, la lógica es la misma: construir por construir y especular. Porque esta es la apuesta de la lógica del modelo chileno, tan famoso y difundido en toda América latina: “Enabling Market to Work”, independientemente de la calidad de los productos y de su impacto en el territorio, en los entornos barriales. Otro fenómeno relacionado –pero difícil de saber si más relacionado a la revuelta de octubre 2019 o al COVID-19– es la multiplicación de las tomas de terreno y de los campamentos, nuestros asentamientos precarios. Hace veinte años que prácticamente las tomas habían desaparecido y actualmente vuelen a ser realidad cotidiana [se refiere a los últimos veinte meses]. Las tomas masivas crean áreas de conurbanización alrededor o entre ciudades intermedias, en el sur del país –donde las tomas no existían– en el largo borde costero o en las ciudades norteñas extractivistas. Otro fenómeno, la migración, el flujo migratorio en América Latina está redefiniendo cómo está la ciudad y cómo se está ocupando.

No se oye acerca de esto a nivel internacional: mucho se habla del fenómeno migratorio en Europa; pero en América Latina, es mayor. El ingreso masivo de migrantes más el alza desproporcionada del valor del suelo, la vivienda y de los materiales de construcción evidencian graves problemas en el subarriendo informal de piezas en conventillos, en barrios tradicionales precarizados. También, se expresa en el vivir en carpas en las veredas y en los parques, que es una nueva forma de ocupar la ciudad que se debe considerar.

Mercedes Di Virgilio- Gracias, Ana. Creo que podemos dar lugar entonces al tercero de los ejes, que es justamente el que plantea el papel de la ciudadanía, de las organizaciones sociales, de los reclamos, de los conflictos, de la conflictividad social que abrió el COVID-19 y cómo han reaccionado las organizaciones frente a la pandemia. En Argentina, la actividad de las organizaciones no cesó en ningún momento. Fueron y son las encargadas de la asistencia directa. Tomó preponderancia su papel como proveedoras de asistencia directa, en desmedro incluso de reclamos más sistemáticos u orgánicos frente a los poderes públicos.

Ana Sugranyes- A estas alturas del momento transformador que vivimos en Chile, resulta difícil analizar los procesos sociales desde la realidad del COVID-19. Es verdad que, durante el encierro más fuerte del año 2020, sí hemos conocido momentos de rearticulación de redes sociales dormidas, que habían quedado de los tiempos del hambre: nos habíamos olvidado de esta práctica social solidaria de la *olla común* que, al calor de la revuelta y de los cabildos, volvieron a brotar de forma muy rápida. El Estado no ha sido capaz de responder y apoyar estas capacidades de organización local. De hecho, en nombre de la sanidad pública, muchas ollas comunes han sido quemadas o mojadas por el guanaco lanza agua de la policía. El Estado cerró las redes tradicionales de los almuerzos en los colegios públicos. Una vez más, llamó a los supermercados a preparar cajas individuales de consumo básico, aprovechando la foto de las autoridades entregando cajas a domicilio. Salud pública, principios ilusorios del “quédate-en-casa”, revuelta y represión crearon más confusión que respuesta a las exigencias de la pandemia. Las ollas comunes y sus prácticas de organización social, entre cabildos y asambleas, están reinstaladas en los barrios populares. La pregunta es si esta organización popular permitirá apoyará las movilizaciones que actualmente (año 2021) se desarrollan en Chile a dos años de la revuelta de octubre de 2019, en plena campaña electoral, con graves situaciones de corrupción relacionadas con el Presidente de la República, las Fuerzas Armadas, la policía y varios sectores empresariales. Vivimos un momento álgido donde muchas fuerzas se conjugan en contra del alcance de la Convención Constitucional que el pueblo ha conquistado.

En los barrios populares –evidentemente mayoritarios en las ciudades de Chile– además del hecho social de compartir la comida, surgen astutas medidas sanitarias para adaptar las condiciones de vida en las que no podían aplicarse el “quédate-en-casa”: por ejemplo, en la entrada a los barrios, sistemas de lavado de manos; o en el tema de la educación, con los colegios cerrados y acceso mínimo a internet, se organizan un voluntariado de jóvenes para atender a niñas y niños en sedes

sociales. El acceso a internet ya forma parte de las exigencias de la canasta básica y es un grito más en las demandas de subsistencia en toda América Latina.

En los barrios donde vivimos nosotros privilegiados, el encierro o ley del confinamiento ha contribuido a cambios: desapareció aquel vecino a quien apenas saludabas por las prisas de la ciudad activada; el tiempo de la convivencia forzada permite conversar, organizar actos sociales o actividades deportivas colectivas olvidadas en edificios y en condominios.

Se superponen entonces la pandemia del COVID-19 y la revuelta del anti neoliberalismo. Resulta difícil distinguir las causas de los cambios dados en la ciudad; los temas políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales se confunden en transformaciones de sociedad, de estado y de ciudad. Hemos pasado de una situación de rabia, de cólera, de mucho rechazo de todo en el espacio público, a la obligación de hacerlo desde la casa, desde el caceroleo, desde otras formas de liberarse de la rabia, pero manteniendo la dimensión positiva de la presencia de todas y todos –o por lo menos de la mayoría– en esta oportunidad y la esperanza colectiva de transformación, el elemento esencial de algo distinto en construcción. El proceso constituyente en sí, se ha construido durante los tiempos del encierro y esto es difícil de explicar pero ha funcionado. Nosotros, aquí encerrados en la casa el día de la elección de la Convención Constitucional estábamos con unos nervios espantosos y nos decíamos: “hemos hecho todo para que la derecha coma el pastel y no se lo comió”. ¿Qué pasó? Yo creo que esta rabia en el espacio público se ha convertido en una cólera decantada y más racional. Es una necesidad de avanzar, de dar un salto generacional en el quehacer político, es un rechazo a todo lo que sería la institucionalidad partidista tradicional y, concomitantemente, la emergencia de la necesidad de construir otras relaciones que no tienen que ver con el esquema tradicional de izquierda-derecha, sino que con mucha movilidad de un sector a otro. Es el relevo generacional, con ideas no enmarcadas en los dogmas de los siglos XIX y XX, sino en la conciencia de los cambios necesarios para salvar el planeta.

Los mayores desafíos están relacionados con las causas del COVID-19, especialmente la defachatez de nuestras pautas de desarrollo extractivista y especulativo. Se asocian a la capacidad (o no) de superar las tantas formas de discriminación: de sectores ricos y pobres, de depredadores y víctimas, de expoliadores y marginados, de corruptos y manoseados, de aprovechados y abusados, asentados e inmigrantes. Aclaro que en este listado anti patriarcal reconozco explícitamente una clara intención discriminatoria de género.

La Convención Constitucional que hemos conquistado es flanco de múltiples situaciones adversas: la región de Araucanía sigue ocupada militarmente; la impunidad de la violación de derechos humanos se traduce, entre otros desastres, en el encarcelamiento de dos mil jóvenes sin juicio desde hace dos años; el retiro de los fondos previsionales, o sea la caída del sistema privado de pensiones que afecta la economía nacional y es utilizado por quienes quieren que no haya nueva constitución; ocho mil computadores producen dosis diarias de “fakenews” en contra de las y los constituyentes.

En los temas de ciudad que aquí nos reúnen, tenemos una situación de emergencia habitacional que exige cambios estructurales de mediano a y largo plazo, con la nueva Constitución en mano para redefinir el marco legal y normativo y para reformular las políticas públicas de vivienda y ciudad. Pero exige respuestas inmediatas, tomando distancia de la práctica nefasta de 40 años de subsidio habitacional individual para el acceso a la vivienda en propiedad. Desde diferentes movimientos sociales estamos formulando los principios del derecho de propiedad con función social y ecológica, en alianza con ambientalistas y organizaciones de los pueblos originarios, estamos trabajando en las bases de un ordenamiento territorial y estamos armando el programa del próximo gobierno. Son muchos desafíos, donde está la voz unida –por primera vez desde hace treinta y tres años– de los movimientos de pobladoras y pobladores; se cruzan militantes de facetas políticas diversas y variadas, voces comprometidas desde una miríada de organizaciones sociales, feministas, estudiantiles, profesionales, académicas y de beneficencia. Los compromisos ambientales son determinantes. Trabajamos hacia un encuentro entre los desafíos del buen vivir y del respeto a la madre tierra y la ciudad, en todas sus nuevas facetas: feministas, ecologistas y bicicletistas.

El derecho a la ciudad, esta bandera política que levantamos desde hace tantos años y que también sufre de riesgos de ir vaciándose de contenidos. Un ejemplo: a principios de julio de este año en curso, la Cámara Chilena de la Construcción – la mayor concentración de poder político y económico del país – que, en toda asimetría, ha manejado las políticas habitacionales durante cuarenta años, realizó una Conferencia Internacional de las Ciudades. Se invitó entre otros al famoso rey neoliberal, Joan Clos, para defender el derecho a la ciudad. Aquí corresponde una serie de emoticones de grito, rabia y miedo. En contra cualquier interés económico o político, seguiremos trasformando la ciudad desde sus habitantes, su capacidad de resistencia y su anhelo del cohabitar el planeta para las generaciones futuras, respetando también los ciclos virales. Hagamos ciudad sin corona virus.

21

Víctor Delgadillo- En México, lxs colegas, lxs amigxs, la gente con la que nos vinculamos, algunos colectivos sociales, dirigentxs y vecinxs de los barrios centrales, vemos con tan buenos ojos el estallido social de Chile. También vemos con optimismo y pesimismo, preocupaciones y expectativas diversas el estallido social en Colombia (que, en la reacción represiva del Estado se parecen un poco a Chile) y las manifestaciones sociales de julio de 2021 en La Habana. El contexto inmediato, mexicano, es un poco diferente. Recientemente tuvimos elecciones y en la Ciudad de México la mitad de las 16 alcaldías fue ganada por una alianza de partidos políticos de centro derecha, opositores al gobierno de “izquierda”. Asimismo, uno de los movimientos sociales más fuertes y que más destaca actualmente es el de las mujeres, muy incomprendido por el gobierno nacional. Estas movilizaciones han tenido una fuerte expresión en las ciudades, a través de actos iconoclastas, que son calificados por las autoridades como vandalismo. En varias ciudades latinoamericanas se han repetido este tipo de protestas: en Chile y en Colombia, los colectivos recurren a la iconoclasia, a la destrucción y derribo de monumentos que personifican el poder colonial patriarcal. En México las mujeres han intervenido los monumentos conmemorativos en *Paseo de*

la Reforma con pintas y eslóganes como “Estado feminicida” y la reacción del poder ha sido una total incomprensión hacia las mujeres, calificando sus actos como vandálicos, por lo que ha habido una fuerte confrontación. En materia eminentemente urbana, el COVID-19 ha producido la multiplicación de los desalojos inquilinarios. Y los gobiernos nacional y local, ha hecho un mutis tremendo frente a una colosal multiplicación de desalojos por el no pago de alquileres. Los tribunales nos dicen que, por ejemplo, en 2020 en la Ciudad de México hubo nueve desalojos diarios. Ha habido iniciativas sociales y civiles para que el Estado atienda esta problemática y decrete una moratoria al incremento de alquileres y a los desalojos. Muchos desplazamientos son prácticamente voluntarios, así lo evidencian encuestas e investigaciones que ha hecho la Coalición Internacional para el Hábitat, pero que sean voluntarios no elimina drama alguno, pues estas personas emigran a periferias urbanas con familiares o donde el alquiler es más barato, pero son privadas de la ciudad y la proximidad a sus empleos, servicios y redes sociales. El año pasado organizamos un foro a petición de los colectivos que están en contra de los desalojos, en el que participaron Julio Calderón, Carla Rodríguez y vecinxs de barrios centrales. El foro era para darle visibilidad a este fenómeno, a este problema que tenemos en la Ciudad de México. Reivindicamos, entre otras cosas, que si en 1942, por la crisis en la Segunda Guerra Mundial, el Estado mexicano decretó el congelamiento de alquileres, esta es una situación que lo amerita del mismo modo. Tener más de ciento cincuenta mil muertos en esta época sería un motivo para decretar el congelamiento de alquileres y una moratoria a los desalojos. Pero hay un silencio gubernamental tremendo ante un fenómeno que sigue ocurriendo diariamente. Cada tanto, los diarios dan cuenta de un desalojo. Los colectivos que se han organizado en contra de los desalojos son puntuales, son dispersos y tienen poca capacidad de difundir en medios de comunicación esta realidad.

Un segundo comentario sobre esto que dice Ana Sugranyes de que la Cámara de la Construcción de Chile invitó a Joan Clos a hablar del derecho a la ciudad. A mí, lo que me sugiere es que los conceptos se disputan. Hace más de veinte años cuando el ingeniero Cárdenas, nuestro primer jefe de gobierno electo democráticamente en la Ciudad de México en 1997, hablaba de “Una ciudad para todos”, era un eslogan utópico que aglutinaba a muy diversas fuerzas políticas progresistas y colectivos sociales en resistencia. Sin embargo, después ese eslogan se pervirtió, lo usa la derecha, lo usa la izquierda y seguramente esto pasa también con el derecho a la ciudad. Nuestrxs gobernantes de izquierda, con la mano izquierda esparcen subsidios y con la mano derecha hacen grandes negocios. Por supuesto, ellxs también reivindican el derecho a la ciudad. Una de mis más fuertes críticas a colegas tan cercanos y queridos como Enrique Ortiz y Jaime Rello es cuando en julio de 2010 ellos lucharon para que Marcelo Ebrard, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México les firmara la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la (quién sabe qué) ciudad. Y ellos presentaban esa carta como “un logro”. Sin embargo, ese mismo julio de 2010, el legislativo local contra-reformó la Ley de Desarrollo Urbano, otorgando más atribuciones al gobierno central para construir lo que quisieran las empresas inmobiliarias en cualquier parte de la ciudad. Por ello, para mí, los conceptos son parte de la batalla. Cuando hablamos de derecho a

la ciudad, por supuesto que hay que debatir y decir qué entendemos por el derecho a la ciudad. Si ustedes vienen a Ciudad de México, muchxs colegas les van a decir “ah, pero el derecho a la ciudad está en la nueva Constitución, como en la Constitución de Ecuador y el Estatuto de la Ciudad en Brasil”. Yo siempre les digo “¿Y de qué sirve eso? El mejor ejemplo de derechos sociales que se consignan como letras muertas en leyes, y no se realizan es la Constitución Mexicana que emanó de la Revolución Mexicana de la década de 1901.

Fernando Carrión- Un par de ideas. Me da la impresión de que el COVID 19 no se puede manejar de forma lineal, porque el tiempo ha cambiado sustancialmente. La fase de contagio, en América Latina empezó bajo la lógica importada, para después hacerse comunitario. En el siguiente momento, el tema fue respecto de la enfermedad propiamente dicha y luego la letalidad, vinculada a la edad cronológica y no a la biológica. Y ahora la discusión está ubicada en las vacunas. ¿Qué vendrá luego?

Exactamente lo mismo ocurrió con el planteamiento inicial del “quédate en casa”, que fue una medida rigurosa que produjo una fuerte desmovilización social. Pero, como no fue factible de sostenerla en el tiempo, por ser anti técnica, ha ido cambiando. Desde la óptica política han tenido dos expresiones: las llamadas explosiones sociales, como las ocurridas en Ecuador, Chile, Colombia, entre otros países. Víctor hablaba de ellas, empezando con las dos explosiones sociales pre-COVID-19, en Ecuador y en Chile, en el mes de octubre de 2019. El caso de Ecuador fue muy interesante, porque fue un paro nacional convocado directamente por las organizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas, ante la elevación del precio de los hidrocarburos. Pero, dado su nivel de organización, el gobierno tuvo con quién negociar y eso fue lo que ocurrió. Al décimo segundo día se disolvió el paro gracias a los acuerdos alcanzados. En el caso de Chile, se demoró el proceso. En Colombia no fue posible. En Cuba se ha vivido algo inédito. En estos ejemplos está presente nítidamente el COVID-19.

Y, por otro lado, están los procesos electorales ocurridos en Chile con las elecciones locales, regionales y de los convencionales. En el Perú, las elecciones nacionales, como las ocurridas en Ecuador. En México fueron las de mitad de período. En estos procesos electorales hubo un posicionamiento de la temática del COVID-19 en un doble sentido: se convirtió en un tema central de debate en los procesos electorales, como nunca había ocurrido, posicionando a la salud con un peso singular. Pero también condujo al uso de la tecnología de punta en la campaña electoral, usando las redes sociales y las diversas plataformas existentes (Youtube, Tik Tok, Whatsapp). Con ello se produjo un desplazamiento de la marcha popular, del casa en casa, de la concentración en la plaza, hacia estas grandes plataformas tecnológicas.

Uno de los efectos más complejos, que no solo provienen del COVID-19 sino también de las redes sociales, es la crisis de representación política que estamos viviendo en toda la región. Daría la impresión que estamos entrando a una democracia sin partidos políticos. Ecuador, por ejemplo, con diecisiete millones de habitantes, tiene doscientas ochenta y tres organizaciones políticas. En Perú la

cosa no es muy distinta. Los resultados electorales en Chile mostraron –y eso que Chile es un país institucionalizado– que lxs convencionales electxs son principalmente independientes. Quizás el caso de México sea distinto, aunque se ha pasado de la época en que había un solo partido, a la de ahora en que hay una representación bastante plural. El resultado de estos procesos electorales nos pone frente a una democracia sin partidos políticos que no sé sabe en qué pueda terminar y en la cual el COVID-19 ha tenido su responsabilidad.

Lo último y me preocupa profundamente, porque yo trabajo el tema de la violencia: veo su acelerado crecimiento y mutación. La violencia está creciendo de una manera que no nos imaginábamos por el incremento de sus grados, por el peso tecnológico, y por la presencia de su modalidad organizada. Y esto está pasando prácticamente en todos los países de la región, con formas que nosotros no conocíamos y que hoy nuestra población la tiene como uno de los núcleos principales de demanda: la seguridad ciudadana.

Miguel Barreto- Han sido excelentes las participaciones, me encantó también la mirada que nos dio Ana. Una mirada micro y, yo diría, un poco desde abajo, desde los barrios, las organizaciones. Pero hay dos cuestiones que quiero destacar, que se han mencionado y que me parece que están muy asociadas con la cuestión de la pandemia, por lo menos en nuestra realidad.

Una es la cuestión de estos grupos de ultraderecha que han aparecido movilizados constantemente. Un poco vinculado a la cuestión de la violencia que se ha estado señalando, pero creo que ha aparecido un nuevo sujeto político, yo diría, por lo menos en algunos países, para el cual cualquier atisbo de regulación, cualquier atisbo de control que se ha querido implementar durante la pandemia, ha sido interpretado ya directamente como comunismo: libertarios que salen a manifestarse y, en muchos casos, con mucha agresividad en el espacio público. Es una cuestión que profundiza este fenómeno que vulgarmente llamamos *la grieta*, esta falta de canalización democrática de las ideas políticas que se expresan violentamente. Esa es una cuestión que me gustaría dejar señalada. Y la otra, es que para bien, como lo señaló Ana, la pandemia ha vuelto a poner con mucha fuerza en la agenda la cuestión ambiental. Particularmente, hubo un rejuvenecer de las organizaciones ambientales y de la necesidad de reivindicar el cuidado del planeta, etc. Esto, desde lxs grandes intelectuales hasta las organizaciones de la sociedad que han salido a manifestarse y a expresarse muy claramente durante toda esta etapa. Fundamentalmente, esta dicotomía entre desarrollo y ambiente o ambiente y desarrollo, que sobre todo en Argentina está volviendo con los megaproyectos productivos, es algo que está poniéndose en discusión nuevamente. Se dio, en gran medida, durante los años noventa, ochenta sobre todo, en Argentina, y ahora nuevamente está volviendo.

María Carla Rodríguez- Muchas gracias, Miguel. Efectivamente el COVID-19 de algún modo expandió y visibilizó la relación entre la cuestión ambiental y la dinámica y el modelo de desarrollo que han impulsado estas modalidades

extractivistas en gran parte de nuestro planeta. Y también un salto hacia una conciencia inicial, más generalizada, como puesta en palabras de estas cuestiones.

Una de las cuestiones que Fernando mencionó fue que, en la primera hora, todos nuestros gobiernos salieron a plantear claramente esta política de “quedate en casa”, y rápidamente también, aunque sea verbalmente, en el discurso y por los efectos cotidianos, se vieron grandes mayorías de nuestras poblaciones que no tienen casa, en las ciudades y no solo en las ciudades. Los y te invitamos Ana a reflexionar sobre un cuarto eje específicamente sobre esta relación entre la pandemia y el hábitat popular. Algunxs de ustedes saben que tengo una relación muy directa con el sector cooperativista autogestionario. Y en este año y medio de pandemia he podido, compartiendo con ellxs, visibilizar diferencias significativas entre esa condición cotidiana de vivir en una cooperativa y la situación del mismo sector social que, en la enorme mayoría, transita situaciones de una gran criticidad. La gran diferencia es vivir en una cooperativa que pudo ser construida colectivamente, que es un hábitat adecuado, que cuenta con los servicios, con una materialidad, pero sobre todo, también con los activos intangibles: la capacidad de organización, la capacidad aprendida de tomar decisiones colectivamente, de generar aunque sea pequeños ahorros propios, no solo la dependencia del subsidio la política central, la escucha atenta a las situaciones cotidianas a nivel intrafamiliar, vinculadas a la salud, o a la escuela, muy similares a estas cuestiones que comentaba Ana.

Entonces, el desafío es cómo se orientan nuestras políticas. Queríamos invitarlos a analizar en este eje la cuestión de los barrios populares. En este marco, pedirte, Miguel, que inicies la conversación con las reflexiones sobre esta cuestión, compartiendo cuál es tu opinión recuperando tus investigaciones y lo que se ha debatido recientemente en la Red de Asentamientos Populares: ¿cómo está funcionando? ¿Cómo ven cómo ha impactado el COVID-19? Y ¿cómo se están evaluando avances, retrocesos y desafíos en torno a las políticas del hábitat popular en este contexto?

Miguel Barreto- En junio terminamos con la organización del encuentro de la Red de Asentamientos Populares de Argentina. Asimismo, nosotrxs, como grupo de investigación, estuvimos trabajando durante todo el año en una investigación interdisciplinaria con grupos de geógrafos sociales, urbanistas, a través de un proyecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, una investigación realmente muy interesante que ahora estamos terminando. Es un proyecto corto, de un año, se trata de un programa especial que lanzó el Ministerio para la temática de COVID-19 y lo hicimos muy localizado en nuestra provincia y en su capital, donde tuvimos acceso a fuentes de información muy buenas. Pudimos contar con la localización domiciliaria de los casos, lo que nos permitió efectivamente hacer un seguimiento muy interesante, sobre todo de la dinámica y el comportamiento de la pandemia. En este primer informe, el corte que hicimos y que se va a conocer ahora es durante el 2020. Existe una recurrencia con los antecedentes y las investigaciones que indagamos de otras ciudades, no solamente de América Latina, sino también

mucha recurrencia incluso con ciudades de países más desarrollados desde el punto de vista de la urbanización.

Antes de centrarme exclusivamente en la cuestión de los barrios, lo que es evidente y creo que acá ya todos lo dijimos, es que la trayectoria que ha seguido el virus, la propagación, la difusión, ha sido una trayectoria socioeconómica, iniciándose en los sectores urbanos más consolidados y avanzando hacia las periferias, afectando particularmente a grupos marginados, excluidos, como en muchos casos las poblaciones originarias, aborígenes, de nuestro territorio [refiriéndose a la ciudad de Resistencia, Chaco, Argentina]. Focalizando nuestra mirada en la dinámica de cómo se ha comportado la pandemia en los territorios, en general observamos que los focos de contagio ingresaron por los centros urbanos a través de los grupos socioeconómicos más pudientes o acomodados de la sociedad y llegaron a los territorios más desfavorecidos. Los primeros casos y los primeros focos han sido en los barrios, llamémosle, de gente que ha estado en contacto con el mundo. Eso se dio tanto en Buenos Aires, que comenzó por Recoleta, como en nuestro caso, que también comenzó por gente que había viajado y en barrios bien consolidados de la ciudad. La dinámica de difusión territorial —es decir, cómo se ha ido comportando la pandemia y su viaje en el espacio— afectó zonas urbanas en las que se asientan sectores de menores recursos y desde allí, hacia los barrios populares; primero barrios de vivienda social y después hacia las zonas aún más marginadas de los asentamientos populares. Esa trayectoria queda muy clara. El mapa de cualquier ciudad muestra que no hay grandes diferencias en la cantidad de casos afectados, toda la mancha urbana termina siendo afectada. La dinámica de cómo fue la difusión es importante, porque ahí es donde efectivamente se ve que ha ido avanzando por focos y estos focos han estado relacionados con barrios populosos, de vivienda social y asentamientos populares. Los ejes de movilidad tienen mucha incidencia en cómo llega y se propaga el virus. En nuestras ciudades no tenemos más que vías de transporte público o de automóviles, pero las vías estructurales han sido los ejes difusores, las barriadas vinculadas a determinados ejes han sido las que han resultado focos de propagación. Esto lo hemos leído en muchos trabajos, incluso hay un trabajo muy interesante sobre Nueva York, de cómo las vías de metro han sido los canales difusores en esa ciudad. En nuestro caso, algunas vías estructurantes que vinculan los municipios del área metropolitana en la que nosotros estamos o que vinculan los barrios populosos, son los ejes que han contribuido a esa difusión y a su movilidad. Indudablemente, las medidas que se fueron tomando a medida que los focos se detectaban tuvieron cierto efecto, porque los focos se encienden y se apagan. En Argentina, si se analiza por mes, en cada uno de los barrios, con las medidas de aislamiento que se fueron tomando, la curva baja. Si algún barrio popular o algún barrio de vivienda social comenzaba a tener un foco de expansión, inmediatamente se aislaba el barrio, se cerraba el barrio. Esas medidas fueron efectivas al principio y limitadas luego por la necesidad de movilidad más allá del barrio. Hicimos una encuesta muy extendida, y entrevistas, y detectamos esa necesidad de movilidad más allá del barrio muy recurrente. Asimismo, el comportamiento social, cuando se limitó la movilidad, también es interesante. Se revalorizó la vida del barrio en el sentido fundamentalmente de la compra de alimentos: la población pudo comprar

alimento en sus barrios nuevamente. Sin embargo, tenía que salir del barrio, ya sea por cuestiones de trabajo, de compra de medicamentos, de trámites de tipo administrativo, o algunas otras cuestiones como la extracción de dinero de los cajeros automáticos, etc. Todas estas cuestiones rompieron las posibilidades de aislamiento, forzaron la movilidad en el medio de las medidas públicas y fueron elementos también de difusión y de propagación incluso entre las propias barriadas, porque algunas barriadas cuentan con más servicios que otras. La cuestión de la movilidad y de la búsqueda de aislamiento o de encierro de los barrios estuvo en una constante tensión durante todo el año y, fundamentalmente, fue hacia una medida cada vez de más relajamiento y de expansión generalizada de la pandemia en toda el área urbana. Al principio, estallaron en los barrios, y en los barrios tuvieron enormes consecuencias. Un caso muy concreto, en nuestra área metropolitana fue de una etnia toba, que vive prácticamente en comunidad dentro de la ciudad, en barrios que son culturalmente homogéneos. En esta comunidad, el COVID-19 tuvo uno de los efectos más trágicos en relación al conjunto del país, con una altísima mortandad, ya que viven en una situación de mucho hacinamiento. Desde el punto de vista del hábitat, de la vivienda en sí, la pandemia por COVID-19 se propagó más fácilmente no donde hay alta densidad de población solamente sino donde hay alta densidad de viviendas y, fundamentalmente, donde el hacinamiento es crítico. Densidad constructiva residencial y densidad desde el punto de vista de la falta de espacio —hacinamiento—. Otras dos cuestiones que fueron recurrentes en las encuestas: la imposibilidad de contar con buena ventilación o de contar con buena iluminación natural en las viviendas, a veces pequeñas viviendas o viviendas precarias. El hacinamiento, la falta de ventilación, la falta de iluminación natural, la movilidad por necesidades extremas, todos estos factores han contribuido mucho a la propagación y a la difusión del virus, particularmente en los asentamientos populares, pero también en los barrios de vivienda social, sobre todo barrios de media densidad y con varias generaciones de habitantes adentro de las viviendas —es decir, con hacinamiento—.

Asimismo, otro tema que analizamos en las encuestas y en las entrevistas es la cuestión de la educación. Prácticamente, la totalidad de la educación primaria y secundaria, pero particularmente la primaria, pasó a hacerse bajo la modalidad virtual. Si bien fue una medida que se puede valorar como positiva para cortar la transmisión, tuvo un impacto bastante importante, sobre todo en los sectores más bajos o de mayor vulnerabilidad social. En el universo que nosotros investigamos, de los hogares que tenían chicos en las escuelas, ninguno contaba con algún espacio exclusivo para hacer las tareas. En la mayoría de los casos, muchas siendo viviendas pequeñas, se debió compartir el espacio con otras actividades de la familia y con otras personas. Con hermanitos o con hermanitas o con alguien más que estaba haciendo actividades. El detonante fue el problema de los dispositivos. En la mayoría de los barrios, los chicos que pasaron a hacer actividades virtuales prácticamente no tienen computadora, sino que la mayoría hacía sus actividades con teléfonos celulares y, en muchos casos, las hacían con teléfonos celulares compartidos. Siempre los grupos más afectados fueron los grupos más vulnerables. Otra cuestión: el trabajo en la vivienda. El trabajo en el sentido de esto que ustedes señalaban, por ejemplo de la compra en los barrios. En nuestras ciudades, en

muchos casos los negocios están dentro de las propias viviendas. Los propios habitantes de la vivienda abren una despensa, tienen un lugar dentro de la casa como una estrategia más de reproducción económica a través de almacenes u otros pequeños comercios. En las viviendas, encontramos una serie de actividades de servicios, talleres y otras que se desarrollan dentro de las viviendas que fueron muy afectadas por el COVID-19. Aquellas que tienen locales comerciales dentro de la vivienda, donde concurre mucha gente a comprar, fueron focos de difusión. Quizás son cosas demasiado micro las que estoy contando, pero pueden ayudar a pensar la cuestión del impacto.

Víctor Delgadillo- Miguel, muy interesante tu aporte. En México, se ha intentado presentar el COVID-19 como una pandemia democrática, una pandemia que a todos les pega, que no distingue sectores ricos de pobres, pero es una pandemia desigual. Las defunciones y los contagios reflejan la segregación socio-espacial. Las áreas en las que se registran más contagios y más muertos son áreas donde vive la población más pobre. Yo creo que un gran impacto que tiene COVID-19 en estos barrios populares también tiene que ver directamente con la educación. En México, a nivel de la escolaridad primaria y secundaria, el gobierno federal no apostó por la educación a través de computadora, sino a través de la televisión. Aquí participaron las dos empresas mayores de televisión abierta haciendo cursos a distancia sin posibilidades de interacción como las que posibilitan las plataformas digitales. Al finalizar el ciclo escolar el gobierno mexicano decretó que en primaria y en secundaria todos aprobaron los cursos, por lo que algunos colegas especializados en esta materia hablan de años perdidos para la educación. En materia de las actividades económicas, hace unos años yo empecé a trabajar el tema de los mercados populares de abasto. Comencé con el patrimonio urbano del barrio de La Merced y allí el principal patrimonio urbano socialmente reconocido y apropiado son los mercados, que en México siguen siendo muchos. La pandemia se usó, también, para estigmatizar los mercados. Lo hicieron no solamente con los mercados mexicanos, sino también con los mercados peruanos. En las noticias de *The Guardian* y *The Economist*, por ejemplo, hablaban de los mercados de Perú o de México como del epicentro de los contagios. Por supuesto que hay contagios en esos sitios, pero sin dudas esas notas exageraban porque son parte de una guerra sucia. Los mercados ya de por sí vienen siendo estigmatizados, se habla de que ya llegaron al fin de un ciclo de vida, de que son obsoletos en términos funcionales, físicos y económicos. La pandemia viene a rematar este discurso, se vienen a imponer con fuerza estos proyectos de rescate de mercados higiénicos. En esta cuestión, juega mucho también la ubicación de los mercados. Los que están en barrios de clases medias altas o los que están en el centro histórico son los más atractivos. A estos mercados los quieren *gourmetizar*, los quieren volver como el mercado de San Miguel de Madrid o como La Boquería, de Barcelona. Pero, en otros barrios, también llegaron propuestas que venían de antes, de inversionistas que pretenden “modernizar” los mercados de abasto, porque son antihigiénicos y obsoletos. Los mercados de un piso pretenden ser demolidos por los inversionistas, para construir nuevos edificios de veinte pisos con mercado en

planta baja que “no le costaría nada a la ciudad”. Es interesante cómo la pandemia viene también para estigmatizar este tipo de mercados.

Fernando Carrión- Es muy interesante esa experiencia vivencial sobre lo que está pasado en territorio. Una primera idea es que no podemos generalizar lo que ocurre en las grandes ciudades en las ciudades medias o pequeñas. ¿Por qué digo esto? Porque el epicentro de la pandemia fueron las grandes ciudades. En el caso de Ecuador, Guayaquil; en Perú, Lima; en Argentina, Buenos Aires; en México, Ciudad de México; en Brasil, San Pablo, y así sucesivamente. Una cosa es lo que ocurre en las grandes ciudades y otra, en las ciudades medias y pequeñas. El golpe no es exactamente igual. Inversamente más complejo es en la parte sanitaria, porque las infraestructuras más adecuadas están en las ciudades grandes y las de menor calidad en las otras urbes.

Una segunda cosa: que tampoco es igual dentro de las ciudades. Cuando tuvimos la pandemia importada, inicialmente llegó a los barrios de altos recursos económicos. En Lima, Miraflores fue clave; en Santiago fueron Las Condes y Providencia; en Guayaquil fue Samborondón. Después se generalizó, para hacerse comunitaria, gracias al uso del transporte colectivo y masivo. Proceso que va en la línea de lo que afirmaron Miguel y Víctor, respecto de que no podemos decir que sea una enfermedad democrática, que a todos nos afecta por igual. ¿Por qué? Porque debemos considerar lo que llaman la edad cronológica que es general, pero también la edad biológica, que es el resultado del acceso a la alimentación, a los servicios, a los lugares en donde se vive, etc. De allí que, obviamente, los sectores más vulnerables sean los sectores de bajos ingresos.

Una tercera cosa: tampoco los barrios de bajos ingresos dentro de las grandes ciudades tienen las mismas características. Los barrios más antiguos tienen condiciones diferentes a los barrios más recientes. Las villas próximas al centro tienen una característica distinta a las más distantes. Hay que saber también distinguir que cuando se diseñan políticas hay que focalizar, establecer políticas explícitas para cada momento y para cada espacio. Ante la crisis de la planificación urbana que hemos vivido en América Latina, por la introducción de la ciudad neoliberal, lo que se ha consolidado es el urbanismo de proyectos, produciendo nuevas y mayores inequidades. Creo que habría que hacer un giro, basado en los debates planteados en estos meses, en el contexto del COVID-19. Aquí hay uno que tiene alta centralidad y que es el configurado alrededor del urbanismo de proyectos y del urbanismo ciudadano. El primero hace referencia a las intervenciones puntuales del capital para rentabilizar la ciudad y el segundo, el urbanismo ciudadano, el que va en la línea del buen vivir y del Sumak Kawsay. es un urbanismo de escala humana, de proximidad, del vecindario, de quince minutos, donde la tecnología está presente.

El urbanismo ciudadano debe contar con internet comunitario. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en este año y medio de pandemia es que las brechas digitales se han incrementado por esta razón. Un dato simple: en Nicaragua solo el 15% de los profesores tiene computadora. ¿Qué porcentaje será en el ámbito de los estudiantes? Probablemente más bajo que eso. ¿Qué ocurre con el 85% restante?

Pues, tendrá que ver cómo se las arregla o, como decía Víctor, “todos pasan, todos aprueban”. Esto genera unas brechas brutales.

Esta es una gran discusión que deberíamos tener, porque antes la propuesta que había era la mal llamada ciudad inteligente, que era la de tener internet en el gobierno de la ciudad y en el espacio público. Hoy en día, luego de lo que hemos vivido respecto de la penetración de la tecnología en todos los espacios, emerge como imperiosa la necesidad de tener internet en el espacio doméstico, porque la gente tiene que conectarse desde su casa con el comercio (telecomercio), con la salud (telesalud), con la educación (teleeducación). La reivindicación del internet comunitario hay que levantarla para que no se generen más desigualdades y brechas.

Ana Sugranyes- Hay temas abiertos que debemos seguir analizando, no hemos tocado en este ámbito. Queda planteado el tema de los arriendos y de los subarriendos y su relación con los desalojos y las tomas que se están multiplicando.

Mercedes Di Virgilio- Les agradecemos enormemente disponer de este tiempo para conversar con nosotras y su participación en la revista de nuestro Instituto. Para Carla y para mí es sin dudas un orgullo. Cuando pensamos la mesa, dijimos “aprovechemos la pandemia y las posibilidades que nos da para encontrarnos con amigos, con amigas entrañables, queridos, referentes, referentas del campo de los estudios urbanos, y dialogar con ellos y con ellas”. Así lo hicimos y, creemos, que se han desplegado una cantidad de planteos interesantísimos para seguir pensando nuestras ciudades. ¡Muchas gracias Ana, Fernando, Víctor y Miguel!